



Misión Permanente de España
ante las Organizaciones Internacionales
GINEBRA

OHCHR REGISTRY

26 JAN 2010

Recipients : *SPD*

PGO/MSS/N°046/2010

La Misión Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra saluda atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas (Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos) y en respuesta a la Nota Verbal referencia GVA 1130 de 20 de noviembre de 2009, relativa a la Resolución 8/11 del Consejo de Derechos Humanos de 18 de junio de 2008 titulada "Los derechos humanos y la extrema pobreza", tiene el honor de remitir las respuestas del Ministerio de Trabajo e Inmigración y del Ministerio de Sanidad y Política Social al cuestionario sobre la protección social de las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos, para la preparación del informe anual de la Experta Independiente al Consejo de Derechos Humanos.

La Misión Permanente de España aprovecha esta oportunidad para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas (Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos) el testimonio de su más alta consideración.



Ginebra, 25 de enero de 2010

Secretario General de las Naciones Unidas
Oficina de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos
Palais Wilson
GINEBRA



**MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL**

**SECRETARÍA GENERAL
DE POLÍTICA SOCIAL
Y CONSUMO**

**INSTITUTO
DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE GESTIÓN**

Cuestionario destinado a proporcionar información para la realización del informe anual sobre "la protección social de las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos".

I Marco legal e institucional

Detalles sobre el marco legal en el que se establece el programa

A) Las Pensiones no contributivas, se encuentran reguladas en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de dicha Ley.

B) Estas pensiones no contributivas son de dos tipos: Pensiones de jubilación y pensiones de invalidez.

C) Centrándonos en las pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva, se destaca:

Requisitos:

EDAD: Tener 65 o más años

RESIDENCIA: residir en territorio español, y haberlo hecho durante 10 años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la del devengo de la pensión, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Período de carencia

No existe, se asegura una prestación económica, asistencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para causar derecho a pensión contributiva.

Es un programa no contributivo

Marco Institucional utilizado para aplicar el programa

La gestión y el reconocimiento del derecho a percibir una pensión no contributiva se realiza por las Comunidades autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). En las ciudades de Ceuta y de Melilla, se hace directamente por el



IMSERSO. El pago de estas pensiones se lleva a cabo por la Seguridad Social con cargo al presupuesto del IMSERSO

Organizaciones de la sociedad civil implicadas en la elaboración del marco legal.

En la exposición de motivos de la Ley que introdujo en la Seguridad Social, prestaciones en su modalidad no contributiva se recoge que las diferentes Organizaciones inter o supranacionales vienen recomendando que la Seguridad Social extienda su ámbito, con el doble propósito de garantizar a los trabajadores el mantenimiento de ingresos proporcionales a los obtenidos durante su vida activa y, al propio tiempo, asegurar a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentren en estado de necesidad, unas prestaciones mínimas.

Se han adoptado parámetros recomendados por diversos Organismos supra o internacionales, tales como las Comunidades Europeas o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

II Los costes y la cobertura del programa

Número de beneficiarios del programa, perfil (sexo, edad, etnia, origen...)

El número de pensionistas no contributivos de la Seguridad Social en España a noviembre de 2009 ascendía a 455.934 personas, de los que 259.257 lo eran por jubilación, es decir mayores de 65 años.

El perfil del pensionista no contributivo de jubilación, se corresponde con una mujer española con una edad comprendida entre los 70 y los 79 años, cuyo estado civil es el de casada y que vive integrada en una unidad económica integrada por dos o tres personas.

En este sentido, el 83,13% de los pensionistas no contributivos de jubilación son mujeres, de las que el 59,01 se encuentran casadas. Igualmente, el estado civil más representativo entre los hombres pensionistas se corresponde con el de casado, que agrupa el 44,66% de los titulares.

Áreas geográficas del país que cubre el programa.

Nacional, Toda España

Presupuesto anual del programa ¿Porcentaje del PIB que representa?

El presupuesto del año 2009 fue de 2.210.552,28 miles de euros.

El Producto Interior Bruto a precio de mercado 3º trimestre 2009 de acuerdo con la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ascendió a 252.000 millones de euros, por lo que el porcentaje que representa se encuentra en torno al 0,80 del PIB.



Detalles sobre la financiación.

Su financiación se lleva a cabo por transferencia del Presupuesto del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, es decir su financiación se lleva a cabo vía impuestos nacionales.

Algunas Comunidades Autónomas complementan estas pensiones no contributivas con una cuantía mensual o anual, con cargo a sus presupuestos, es decir recursos regionales o de Comunidad Autónoma.

Todos los solicitantes que reúnen los requisitos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social para causar derecho a pensión no contributiva de la Seguridad Social, causan derecho a la misma. El crédito establecido para las pensiones es ampliable.

La cuantía de la pensión íntegra no contributiva en relación con el salario mínimo interprofesional se encuentra en el año 2009 en el 53,90%, ya que la cuantía de la pensión se establece en 336,33 € mensuales y el salario mínimo interprofesional en 624 € mensuales.

La cuantía íntegra de la pensión no contributiva, se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Se establece una cuantía mínima de pensión, que se cifra en el 25% de la cuantía íntegra.

Los pensionistas de invalidez que requieren ayuda de tercera persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria perciben un complemento del 50% del importe de la cuantía íntegra.

Los pensionistas que residen habitualmente en una vivienda alquilada perciben un complemento anual por tal causa.

La concesión de la pensión está sujeta a límites económicos personales y familiares. Si se superan estos límites de ingresos, no se causa derecho a la pensión.

III Procedimientos de aplicación

Para pagar a los beneficiarios se utiliza la transferencia bancaria.

Para informar a los beneficiarios, se utiliza la carta informativa del Ministro/a competente en la materia, se facilitan folletos informativos anualmente a las Comunidades Autónomas gestoras de estas pensiones, a las oficinas de la Seguridad Social, Delegaciones del Gobierno, y asociaciones de personas mayores y personas con discapacidad. Asimismo se facilita información en Internet.

Las Comunidades Autónomas bilingües, facilitan esta información en castellano y en su propia lengua (euskera, catalán, gallego).



A los beneficiarios, se les ofrecen prestaciones sanitarias y farmacéuticas gratuitas y servicios sociales complementarios de la Seguridad Social.

IV Mecanismos de supervisión y procedimientos de queja.

Las Comunidades Autónomas gestoras de estas pensiones, en cumplimiento de lo establecido en la ley General de la Seguridad Social, llevan a cabo procedimientos de revisión anual y a instancia de parte de estas pensiones. Asimismo se efectúan cruces de datos con otros ficheros públicos.

Contra las resoluciones emanadas de los Órganos gestores de estas pensiones, existe reclamación previa a la vía laboral, y posterior recurso ante la Jurisdicción social.

No se han interpuesto acciones legales contra el programa o contra los responsables de su aplicación.

V Estudios y evaluaciones existentes de las pensiones de jubilación

Se elabora por el IMSERSO con periodicidad anual, un estudio sobre el perfil del pensionista no contributivo de la Seguridad Social y el perceptor de prestaciones de la LISMI, que se encuentra en la página del IMSERSO.

Bianualmente se elabora el Mapa de prestaciones de naturaleza no contributiva y su correlación con la población española. Esta publicación se encuentra, al igual que la anterior, en la página Web del IMSERSO.

Asimismo, en cumplimiento de una Proposición no de Ley de la Comisión no permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, de fecha 5 de octubre de 2005, sobre la aplicación de la ley de Prestaciones no contributivas, se elaboró por el IMSERSO un Informe sobre Evaluación y valoración de la aplicación de la ley de pensiones no contributivas.

Como otros programas de protección social disponibles, se señalan las prestaciones sociales y económicas derivadas de la Ley de Integración social de las personas con discapacidad (LISMI) y las pensiones asistenciales (PAS) a favor de ancianos e incapacitados para el trabajo.

Estas prestaciones, se encuentran a extinguir, salvo el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte y la asistencia sanitaria y farmacéutica de la LISMI. Sus actuales beneficiarios pueden optar, en cualquier momento, por ser perceptores de pensión no contributiva de la Seguridad Social, cesando en el percibo de sus actuales prestaciones.

Madrid, 30 de diciembre de 2009.



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SUBSECRETARIA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Relaciones
Sociales Internacionales

CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN AL CUESTIONARIO SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

En los apartados siguientes se da respuesta, en las materias que son competencia de este Ministerio, a las preguntas del cuestionario, remitido por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, destinado a proporcionar información a la Experta Independiente para la realización del informe anual a presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema "la protección social de las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos".

I. El marco legal e institucional

1. Detalles sobre el marco legal en el cual se establece la pensión de jubilación

En la actualidad, el Sistema de protección de la Seguridad Social española contempla dos modalidades de pensión de jubilación: una modalidad contributiva y una modalidad no contributiva, con una acción protectora y sujetos protegidos diferentes. Ambas modalidades se regulan en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (artículos 160 a 170), y en otras normas de carácter reglamentario.

En los apartados siguientes se enumeran y describen, por separado, las distintas situaciones desde las que se puede acceder a la pensión de jubilación en el marco de la Seguridad Social española, distinguiendo el carácter contributivo y no contributivo de esta prestación.

1.1. Modalidad contributiva

En la modalidad contributiva se reconoce una prestación económica, una vez alcanzada la edad establecida, a quienes cesen o hubiesen cesado en la actividad por la que estaban incluidos en el Sistema de la Seguridad Social, poniendo fin a su vida laboral, o bien reduzcan su jornada de trabajo y su salario.

La edad fijada, como norma general, para ser beneficiario de la pensión de jubilación contributiva es la de sesenta y cinco años.

Sin embargo, existen excepciones a esta regla general y dicha edad puede ser rebajada o anticipada en determinados supuestos, en función de las



actividades profesionales desempeñadas por los trabajadores, de los derechos adquiridos bajo el régimen de una legislación derogada o bien como medida de fomento del empleo impuesta por las condiciones socio-laborales.

La singularidad de todas estas situaciones ha generado una amplia tipología de la prestación, configurada bajo las distintas modalidades que se analizan a continuación.

La realización de actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que comporten elevados índices de morbilidad o mortalidad va a permitir reducir la edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso a la jubilación, mediante la aplicación de coeficientes reductores al tiempo efectivo de trabajo, en determinados colectivos:

- Trabajadores pertenecientes al Régimen Especial de la Minería del Carbón (Real Decreto 298/1973, de 8 de febrero).
- Grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero (Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre).
- Personal de vuelo de trabajos aéreos (Real Decreto 1559/1986, de 28 de junio).
- Trabajadores ferroviarios (Real Decreto 2621/1986, de 26 de diciembre).
- Trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre).
- Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos (Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo).
- Personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas en las que concurren evidencias que determinen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas. (Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre).

Es importante destacar que la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión con una edad inferior a la de 52 años.

Además, en los supuestos de acceso a la pensión sin estar en alta o situación asimilada en el momento del hecho causante, será exigible en todo caso haber cumplido 65 años de edad de manera efectiva, sin que este



requisito se entienda cubierto por aplicación de las bonificaciones de edad a personas que en el momento del hecho causante no desarrollen actividades que tengan establecidos coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Existen, asimismo, otros colectivos que pueden adelantar la edad de jubilación por estimarse que sus actividades no pueden ser desempeñadas a partir de cierta edad, tal es el caso de los artistas y profesionales taurinos (Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre).

La legislación contempla, además, otras situaciones en que se permite el acceso a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 65 años, ya sea por aplicación de medidas de fomento del empleo, ya sea por respeto a derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.

- Jubilación como medida de fomento del empleo. Dentro de este apartado se contemplan los supuestos de anticipación de la edad de jubilación directamente relacionados con la política de fomento del empleo: jubilación especial a los 64 años y jubilación parcial.
 - ✓ En la jubilación especial a los 64 años, prevista en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, se permite rebajar la edad mínima de 65 años a los 64 años a los trabajadores por cuenta ajena cuyas empresas los sustituyan, simultáneamente a su cese por jubilación, por otros trabajadores que deben estar inscritos como desempleados en la correspondiente Oficina de Empleo.
 - ✓ A través de la jubilación parcial, actualmente, se permite a los trabajadores a tiempo completo anticipar la edad ordinaria de jubilación hasta un máximo de 5 años, es decir a partir de los 60 años, aunque una modificación reciente, llevada a cabo por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, ha fijado ese límite en los 61 años de edad. No obstante, su aplicación se efectúa de forma gradual y será en el año 2014 cuando se exija, además de otros requisitos, tener cumplidos los 61 años de edad para acceder a la jubilación parcial.

En estos casos, el trabajador concierta, previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo parcial, reduciendo su jornada de trabajo entre un mínimo de un 25 por 100 y un máximo de un 75 por 100; además, es imprescindible que con carácter simultáneo a la jubilación parcial del trabajador se celebre un contrato de relevo con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con el objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.



Por otro lado, los trabajadores que hayan cumplido 65 años de edad y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo de un 25 por 100 y un máximo de un 75 por 100, también podrán acceder a la jubilación parcial y, en este supuesto, sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo.

La jubilación parcial está prevista en el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre.

- Jubilación anticipada por la vía del derecho transitorio. Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 también podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los 60 años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reduce en un 8 por 100 por cada año o fracción de año que le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años.

Si los trabajadores acreditan 30 o más años de cotización y solicitan la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión varía, en función de los años de cotización acreditados, de un 6 a un 7,5 por 100.

Además de lo indicado en el apartado anterior, la Ley General de la Seguridad Social también contempla la posibilidad de jubilarse anticipadamente sin tener la condición de mutualista cuando se reúnan los siguientes requisitos:

- a) Tener cumplidos los 61 años de edad.
- b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
- c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 30 años.
- d) Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador, entendiéndose como tal la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma.

En estos casos, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le



falte al trabajador para cumplir los 65 años el coeficiente correspondiente, según sus años de cotización (del 6 al 7,5 por 100).

Para finalizar, señalar que el Sistema de la Seguridad Social española permite compatibilizar la pensión de jubilación, una vez causada, con un contrato de trabajo a tiempo parcial, dentro de los límites de jornada establecidos (entre el 25 y el 75 por 100 de la jornada a tiempo completo), con la consecuente minoración de la pensión. Esta modalidad de jubilación se denomina "jubilación flexible" y está regulada en el Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre.

1.2. Modalidad no contributiva

Con la finalidad de extender la protección a aquellas personas en estado de necesidad que no han cotizado nunca o bien si han cotizado, no lo han hecho por tiempo suficiente para acceder a una pensión de jubilación en la modalidad contributiva, el Sistema español contempla una modalidad no contributiva de pensión de jubilación, que asegura a los ciudadanos unas prestaciones mínimas. Esta modalidad está vigente en España desde 1991.

La jubilación no contributiva se encuentra regulada en los artículos 167 a 170 de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, como norma de desarrollo de los mismos.

Tienen derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que, habiendo cumplido 65 años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos, residan legalmente en territorio y lo hayan hecho durante 10 años, entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

Su cuantía se fija anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y su gestión está transferida a las Comunidades Autónomas, excepto en las ciudades de Ceuta y Melilla; por ello el desarrollo de este cuestionario se centra básicamente en la pensión de jubilación de modalidad contributiva, que es la que se reconoce y gestiona por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

1.3. Requisitos para acceder a la pensión de jubilación

Con independencia de las condiciones específicas de acceso a la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, que se han indicado en el apartado anterior, la Ley General de la Seguridad Social establece, como requisito necesario para causar derecho a la pensión de jubilación contributiva, además de la edad mínima, tener cubierto un período mínimo de cotización previo, en concreto, quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendido dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.



Para causar pensión en el Régimen General y en otro u otros del Sistema de la Seguridad Social, cuando los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o en situación asimilada a la de alta, es necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos, se superpongan, al menos, durante quince años.

1.4. Cálculo de la pensión en la modalidad contributiva

La cuantía de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, se determina aplicando a la base reguladora los porcentajes siguientes:

- Por los primeros quince años cotizados: el 50 por 100.
- Por cada año adicional de cotización, comprendido entre el decimosexto y el vigésimo quinto, ambos incluidos: el 3 por 100.
- Por cada año adicional de cotización, a partir del vigésimo sexto: el 2 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100.

Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a los 65 años, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización exigible para esta prestación (15 años, 2 dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho), se reconocerá al interesado un incremento adicional del porcentaje por cada año completo cotizado, o que se considere legalmente cotizado, entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión. El importe del incremento es:

- Un 2 por 100, por cada año completo transcurrido desde el cumplimiento de los 65 años hasta la fecha de la jubilación.
- Un 3 por 100, cuando además el interesado tuviera acreditado al menos 40 años de cotización al cumplir 65 años de edad.

Este porcentaje adicional se sumará al que con carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el total de años de cotización acreditados. El porcentaje resultante se aplicará a la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite máximo de pensión establecido en cada momento.

La base reguladora de la pensión de jubilación es el cociente que resulte de dividir por 210, las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante.

2. Regulación administrativa de la pensión de jubilación

Se solicita información sobre las regulaciones administrativas u otros documentos programáticos relevantes que rijan la aplicación de la pensión de jubilación, en caso de no estar establecida por Ley.



Esta pregunta ha quedado respondida a lo largo de la exposición del apartado 1, ya que, como se ha señalado, la pensión de jubilación tiene su regulación legal en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en concreto, en sus artículos 160 a 170. No obstante, existen, además, otras normas de carácter reglamentario (Reales Decretos, principalmente) que determinan las reglas para el reconocimiento de la jubilación, en determinados supuestos especiales, y que también han sido resaltadas al tratar las distintas modalidades de la prestación.

3. Marco institucional utilizado para aplicar la prestación

La necesidad de estudiar reformas dirigidas a garantizar la viabilidad del Sistema público de pensiones llevó en el año 1995 a formular una serie de recomendaciones y consideraciones que fueron recogidas en el informe para el "Análisis de los problemas estructurales del Sistema de la Seguridad Social" (conocido como Pacto de Toledo), aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995.

El Pacto significó un firme compromiso de todos los grupos parlamentarios con el Sistema público de pensiones de la Seguridad Social. Establece las líneas de actuación y de reforma a introducir en el Sistema de pensiones contributivo, y propone adoptar una serie de recomendaciones, en orden al reforzamiento de la consolidación de ese Sistema que, en relación con el tema de la jubilación, se concretan en las siguientes: separación de las fuentes de financiación, constitución de reservas, mejoras de las bases de cotización, reforzamiento de la equidad y el carácter contributivo del Sistema, facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la previsión de Sistemas complementarios externos a la Seguridad Social.

Las reformas legales operadas durante los últimos años en materia de jubilación han tomado como referencia las prioridades marcadas por el Pacto de Toledo, que en el transcurso de los años, desde su aprobación hasta la fecha, ha sido objeto de sucesivas renovaciones parlamentarias que reafirman la necesidad de mantener y reforzar determinados principios básicos en los que se asienta el Sistema de la Seguridad Social como objetivo para garantizar la eficacia del mismo y el perfeccionamiento de los niveles de bienestar del conjunto de los ciudadanos.

El avance más reciente lo constituyen una serie de compromisos relativos a la acción protectora incluidos en el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social suscrito el 13 de julio de 2006 por el Gobierno de España y los principales agentes sociales y económicos, que, a su vez, trae causa de la Declaración para el Diálogo Social firmada por los mismos interlocutores el 8 de julio de 2004. La Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que ha introducido modificaciones que afectan



sustancialmente, entre otras prestaciones, a la jubilación, constituye el soporte normativo de buena parte de los compromisos incluidos en el referido Acuerdo.

II.- Los costes y la cobertura del programa

4.- Número de beneficiarios del programa (anualmente)

El número de pensiones de jubilación abonadas en el mes de diciembre asciende a 5.087.586, con el siguiente desglose según la edad y género de su titular:

PENSIONES DE JUBILACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A DICIEMBRE DE 2009

Grupo de edad	Hombres	Mujeres	No consta	Total
Menores de 60	12.470	329		12.799
60 – 64	256.649	96.596		353.245
65 – 69	821.207	425.327	10	1.246.544
70 – 74	706.444	357.442	22	1.063.908
75 – 79	697.511	355.338	79	1.052.928
80 – 84	465.012	284.857	9	749.878
85 y más	314.502	293.213	10	607.725
No consta	320	239		559
TOTAL	3.274.115	1.813.341	130	5.087.586

5.- ¿Qué áreas geográficas del país (nacional, regional, local) cubre el programa?

Nacional.

6.- ¿Cuál es el presupuesto anual del programa? ¿Qué porcentaje del PIB representa?

El presupuesto de gastos de la Seguridad Social en pensiones contributivas de jubilación para 2009 asciende a 62.576,7 millones de euros, lo que supone en torno al 6% del PIB de este ejercicio.

7.- Por favor, proporcione detalles e indique las fuentes de financiación utilizadas para el programa, así como los gastos principales de las diferentes etapas de aplicación del programa. En particular, ¿el programa utiliza recursos públicos nacionales, regionales y/o locales? ¿Se utilizan recursos externos para este programa?

La pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva y universal, se financia exclusivamente mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.



La jubilación contributiva y los gastos derivados de su gestión son financiados básicamente con las cuotas de las personas obligadas; con las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga; con los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de los recursos patrimoniales de la Seguridad Social; así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas.

8.- ¿Aproximadamente cuántos beneficiarios potenciales no están cubiertos por el programa? ¿Se han iniciado estudios para averiguar las razones de esta falta de cobertura? Si es posible, por favor proporcione detalles de su perfil (por ejemplo sexo, edad, etnia, origen...).

La cobertura que ofrece el Sistema de Seguridad Social no determina la tasa total de cobertura de la población, dado que, además de las prestaciones contributivas de jubilación abonadas por las Entidades Gestoras del Sistema de Seguridad Social, existen otras prestaciones no contributivas o abonadas por otras Entidades.

Como mera información, según los datos del Padrón de 1 de enero de 2009 la población residente con 65 ó más años de edad se eleva a 7.780.830 y el número de pensiones contributivas de jubilación del Sistema de Seguridad Social abonadas a titulares de este mismo tramo de edad asciende a 4.721.542.

9. ¿Cuál es la cantidad media de las pensiones en relación con la media nacional de ingresos o el salario mínimo? ¿Cómo se calcula la pensión?

El coste salarial medio, equivalente a la media de las cotizaciones efectuadas en los dos primeros trimestres de 2009 por los trabajadores en activo, asciende a 1.830,7 € mensuales. Para este mismo ejercicio, el Salario Mínimo Interprofesional está fijado en 624 € mensuales.

Por otra parte, la pensión media de las altas de jubilación causadas durante el presente ejercicio con aplicación de la normativa vigente, se eleva a 1.152,74 € mensuales. Si se considera al conjunto de pensiones de jubilación en vigor en Diciembre de 2009, la pensión media se reduce a 861,49 € mensuales.

A estos efectos, la pensión de jubilación se calcula sobre una Base Reguladora equivalente a la media actualizada de las bases de cotización de los últimos 15 años. A esta Base se aplican los coeficientes que correspondan en función a la edad y los años cotizados por el beneficiario, alcanzándose el 100% con 65 años de edad y 35 años de cotización. Existen porcentajes adicionales cuando se retrasa el acceso a la prestación y coeficientes reductores cuando se adelanta.



III. Procedimiento de aplicación

10.- Procedimientos que se utilizan para pagar a los beneficiarios.

Las pensiones de jubilación de cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social son satisfechas en 14 pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengan en los meses de junio y noviembre, y por un importe, cada una de ellas, igual a la cuantía de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses.

En los supuestos de reconocimiento inicial de la pensión o de reanudación del percibo de una pensión que hubiese sido objeto de suspensión, la paga extraordinaria correspondiente al mes de junio o al mes de noviembre, según proceda, se abona en razón de una sexta parte por cada uno de los meses comprendidos entre aquél en que tengan lugar los efectos iniciales del reconocimiento de la pensión o de reanudación del percibo de la misma y el mes de mayo o noviembre, respectivamente, ambos inclusive.

En los casos de suspensión del percibo de la pensión o extinción de la misma, cualquiera que sea la causa, la paga extraordinaria, posterior a la última percibida, se entiende devengada el día 1 del mes en que se acuerde la suspensión o se produzca la causa de extinción. Se abona, junto con la última mensualidad de la pensión a que se tuviese derecho, en razón de una sexta parte por cada uno de los meses comprendidos entre el mes de diciembre del año anterior o el mes de junio del mismo año, y el mes en que se produce la suspensión del percibo de la pensión o la causa de extinción de la misma, ambos inclusive.

El pago de las pensiones de jubilación tiene lugar dentro del mes siguiente al de la presentación de la solicitud, de manera que a las rentas percibidas en el último mes como trabajador en activo le siguen, sin solución de continuidad, las de la primera mensualidad como pensionista. No existe, por tanto, interrupción en la percepción de rentas al pasar de la situación de activo a la de pensionista.

Una vez efectuado el primer pago, los importes de los pagos mensuales de las pensiones de jubilación deben figurar en la cuenta de los perceptores o a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realiza el pago.

Los pensionistas pueden elegir entre los siguientes medios de pago:

- a) A través de entidades financieras: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales Cooperativas de Crédito; así como las agrupaciones o asociaciones de estas entidades financieras.
- b) Por medio de graduados sociales.



c) A través de los administradores de las residencias de pensionistas de la Seguridad Social, respecto de los titulares que ocupen plaza en las mismas.

d) Giro postal: Está limitado a los pensionistas que no dispongan en su localidad de residencia de otro medio o modalidad de cobro.

La elección inicial del medio de pago y del órgano colaborador, entidad o agente pagador se formula, simultánea y conjuntamente, con la solicitud de la prestación. No obstante, los interesados pueden solicitar el cambio del medio y del colaborador del pago en cualquier momento.

Las pensiones de jubilación están sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto. Las pensiones cuya cuantía anual supere el límite legalmente establecido, están sujetas al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y sometidas al Sistema general de retenciones a cuenta del citado impuesto.

11.- Procedimientos para informar a los beneficiarios sobre la pensión de jubilación

El Instituto Nacional de la Seguridad Social informa y atiende a los ciudadanos:

a) de forma personal y directa, en todos los centros de atención e información de la seguridad social (CAISS), proporcionando:

- Información general sobre la pensión de jubilación y sus trámites.
- Información personalizada a los titulares de pensiones sobre sus derechos y obligaciones.
- Información orientativa sobre la cuantía de la pensión de jubilación, siempre que se solicite con una antelación máxima de dos años a la fecha prevista de jubilación.
- Ayuda para rellenar las solicitudes.
- Recepción y comprobación de las solicitudes de pensión y de la documentación necesaria para su trámite y resolución.
- Gestión de peticiones, modificaciones e incidencias de todo tipo que afecten a los pensionistas.
- Emisión de certificados de la pensión.
- Reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a los pensionistas de jubilación y a sus beneficiarios.
- Recepción y trámite de quejas y sugerencias.

b) por escrito.



c) por teléfono, en el número 900 16 65 65, al que se puede llamar desde cualquier lugar del territorio nacional y sin coste para el usuario.

d) por Internet, mediante la página www.seg-social.es, que permite a los usuarios relacionarse con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para:

- Obtener información general sobre la pensión de jubilación.
- Formular peticiones de información general y técnica.
- Obtener e imprimir formularios de solicitud de la pensión y determinados modelos de certificados que son necesario para su trámite.
- Realizar algunas gestiones sin necesidad de acudir a los CAISS utilizando la "Oficina Virtual", en la que se puedes obtener los siguientes servicios:
 - Descargar el programa informático "Usted mismo" para realizar el cálculo de la pensión de jubilación.
 - Los titulares de pensión de jubilación pueden consultar y obtener informes acreditativos de su situación actual.
 - Los pensionistas pueden consultar y obtener el informe de la revalorización de la pensión del ejercicio en curso.
 - Los perceptores de pensiones pueden consultar los importes devengados o percibidos en el ejercicio anterior, así como las retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
 - Los solicitantes de pensión pueden consultar la situación en la que se encuentra su expediente, utilizando el programa informático "Cómo va mi prestación".

La información incorporada a la página Web de la Seguridad Social está disponible en castellano y en las 4 lenguas cooficiales, catalán, euskera, gallego y valenciano, así como en los idiomas inglés y francés.

Además de los servicios relacionados anteriormente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, envía al domicilio de los interesados notificaciones personalizadas de la revalorización anual de la pensión y de las certificaciones de las retenciones efectuadas a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas. Asimismo, comunica al interesado la resolución favorable de su pensión enviando un mensaje de texto al teléfono móvil que facilite, antes de que le llegue a su domicilio la notificación remitida por correo postal.



13.- Acceso a otros servicios públicos bajo condiciones especiales en particular a los servicios de salud

El acceso a la pensión de jubilación así como la adquisición en general de la condición de pensionista de la Seguridad Social, conlleva el acceso a otros beneficios de la acción protectora del Sistema: ser titular del derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, la dispensación gratuita de prestaciones farmacéuticas y el acceso a los servicios sociales del IMSERSO (en Ceuta y Melilla) o servicios correspondientes de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias, tales como residencias, hogares, viajes, termalismo, etc.

IV. Mecanismos de supervisión y procedimientos de queja

14.- Procedimientos que se utilizan para supervisar las pensiones y entidades responsables de dicha supervisión

El Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene la posibilidad de revisar de oficio sus actos administrativos, es decir, de dejar sin efecto los actos en que hubiere reconocido con anterioridad el derecho a la pensión.

No obstante, la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril) prohíbe a las Entidades gestoras revisar por sí mismas sus actos declarativos de derecho en perjuicio de sus beneficiarios, imponiendo como regla general la obligación de solicitar dicha revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario de la pensión. Con ello se establece una garantía para los beneficiarios y un adecuado encauzamiento para la Administración de la Seguridad Social al revisar sus actos cuando con la revisión se les perjudique.

Ahora bien, la propia Ley exceptúa de esta exigencia la mera rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones que se deriven de la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. De este modo, existen una serie de actos que sí pueden ser revisados de oficio por la Administración de la Seguridad Social sin necesidad, por tanto, de acudir a la vía judicial por demanda contra el beneficiario.

En estos casos, procederá la revisión en vía administrativa, en cualquier momento, y siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- Que se pueda deducir exclusivamente de los documentos incorporados al expediente administrativo.
- Que se trate de error manifiesto e indudable, cuya rectificación no impida la subsistencia del acto.
- Que resulte innecesario acudir a cualquier interpretación práctica, opinión o calificación.



- Que el error consista en meras equivocaciones en las operaciones aritméticas, siempre que permanezcan fijos los sumandos o factores operativos.

En todos los supuestos en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueda revisar directamente el acto de reconocimiento de las pensiones de jubilación y, cuando, como consecuencia de aquélla, resulten prestaciones indebidamente percibidas y el deudor de las mismas sea, simultáneamente, acreedor de alguna prestación económica contributiva, se efectuarán los descuentos correspondientes sobre dichas prestaciones para resarcirse de la deuda contraída por el beneficiario, salvo que éste optara por abonar la deuda en un solo pago.

Tanto la revisión de oficio como aquélla que se insta de la Jurisdicción Social se apartan de los casos en que con posterioridad a la resolución del expediente aparecen nuevos hechos que afectan a las prestaciones o situaciones reconocidas, como son las modificaciones en el estado civil, edad, cambios en la situación económica o laboral, reconocimiento de nuevas prestaciones y otros análogos. En estos supuestos, se trata de una revisión efectuada por imperativo legal que la Administración puede realizar por sí misma en cualquier momento.

Por otra parte, la propia Entidad gestora podrá también efectuar revisiones favorables al beneficiario, basadas, lógicamente, en razones estrictas de legalidad, cuando el acto inicialmente adoptado no sea conforme a derecho.

15.- Procedimientos o mecanismos de queja disponibles para los beneficiarios

Los beneficiarios de la pensión de jubilación y, en general, de todas las prestaciones del Sistema, tienen la posibilidad de manifestar su disconformidad contra la resolución dictada por la Entidad gestora por la que se reconozca o modifique aquélla, interponiendo una reclamación en vía administrativa.

La reclamación previa, además, es requisito necesario para formular demanda ante la Jurisdicción Social y tiene como objetivo poner en conocimiento del órgano que ha dictado la resolución el contenido y fundamentos de la pretensión, ofreciéndole la posibilidad de resolver directamente el litigio y evitar así el proceso jurisdiccional.

Agotada la vía administrativa sin que el interesado haya obtenido el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación solicitada o, aunque se le haya reconocido, si no está de acuerdo, en todo o en parte, con la resolución dictada, tiene la posibilidad de recurrir ante la Jurisdicción del orden social, para que sean los jueces quienes decidan.



Las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que versen sobre el reconocimiento o dénégación del derecho a obtener una pensión de jubilación, son recurribles en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente y sus sentencias, a su vez, son recurribles en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

Además de todo lo indicado anteriormente, existen formularios de "Quejas y Sugerencias", a disposición de los ciudadanos, en todas las Oficinas y Centros de Atención de la Seguridad Social abiertos al público, así como en los registros generales y auxiliares de recepción o salida de documentos de los Servicios Centrales, Direcciones Provinciales y otras unidades periféricas.

Las quejas y sugerencias pueden ser presentadas de forma presencial, mediante la cumplimentación del formulario correspondiente, y mediante correo postal, en el cual se hará constar el nombre, apellidos y domicilio, con el fin de remitirle la copia correspondiente así como la contestación.

Las quejas formuladas no tendrán en ningún caso la calificación de recurso administrativo ni su interposición paralizará los plazos establecidos en la normativa vigente.

V. Estudios y evaluaciones existentes de las pensiones de jubilación

Cualquier iniciativa relacionada con el análisis estructural del Sistema, y su viabilidad y sostenibilidad, se impulsa por la Comisión no Permanente del Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, constituida en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, en la "Estrategia para la Economía Sostenible" el Gobierno se ha comprometido a trasladar, en el primer trimestre de 2010, al Diálogo Social y a la Comisión del Pacto de Toledo diversas propuestas relacionadas con el refuerzo del Sistema de Seguridad Social, entre las cuales se incluye buscar incentivos a la prolongación de la vida laboral, para que la edad efectiva de jubilación tenga en cuenta la evolución de la esperanza de vida.

VI. Otros esquemas de protección social disponibles en beneficio de las personas mayores.

En el ámbito de la Seguridad Social española los pensionistas de jubilación, tanto en la modalidad contributiva como en la no contributiva, tienen derecho a recibir asistencia sanitaria, tanto ellos como sus beneficiarios, y a disfrutar los servicios sociales complementarios de la Seguridad Social.

La prestación de asistencia sanitaria, que reconoce el Instituto Nacional de la Seguridad Social, incluye:

- La atención médica, dispensada gratuitamente por la red pública de salud.



- La atención farmacéutica, igualmente gratuita, excepto la de aquellos medicamentos que, por ley, deben abonar los propios pacientes.

Los servicios sanitarios, dependiendo del ámbito geográfico, los gestionan las Comunidades Autónomas, excepto en las ciudades de Ceuta y Melilla que son gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Además de la asistencia sanitaria y de las prestaciones económicas a las que el pensionista tiene derecho, puede beneficiarse de los servicios sociales de carácter complementario, tales como centros dedicados a la atención de pensionistas (hogares, residencias, etc.), de discapacitados (ocupacionales y de recuperación), servicios de ayuda a domicilio, programas de vacaciones, balnearios, tele-asistencia, etc.

También, en su caso, podrán beneficiarse de prestaciones de carácter específico, establecidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que van dirigidas a personas, que han sido valoradas con un determinado grado y nivel de dependencia, en orden a su capacidad y autonomía personal para realizar las tareas básicas de la vida ordinaria y a su necesidad de apoyo y supervisión.

Los servicios sociales y las prestaciones mencionadas, dependiendo del ámbito geográfico, se gestionan por las correspondientes Comunidades Autónomas y también por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Existe otro tipo de ayudas dirigidas a las personas mayores en relación con la vivienda, suministros (gas, luz y teléfono), transportes públicos, espectáculos, etc., pero quedan fuera del marco competencial de la Seguridad Social y corresponde al Estado, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos su reconocimiento.

Madrid, 20 de enero de 2010

Presidencia
Española

2010.es